

## RESOLUCION N. 00885

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que mediante los radicado 2002ER43629 del 04 de diciembre de 2002, y 2002ER44182 del 09 de diciembre de 2002, se interpusieron queja anónima contra el establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 en la ciudad de Bogotá, D.C.

El día **10 de enero de 2003**, profesionales de la Subdirección Ambiental Sectorial, adelantaron visita técnica al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 en la ciudad de Bogotá, D.C., de lo cual se dejó constancia en el Acta que obra a folio 5.

Teniendo como base lo anterior, profesionales de la Subdirección Ambiental Sectorial, emitieron **Concepto Técnico No. 463 del 28 de enero de 2003**, en el cual se concluyó que:

*“Se sugiere requerir al Representante legal del establecimiento, Jairo Rodriguez, para que en un término de 15 días adecue (sic) una zona de pintura con su respectiva cabina de extracción y ducto de desfogue a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 948.”*

Que mediante Radicado No. 2003EE27608 del 19 de septiembre de 2003, la Subdirección jurídica requirió al señor JAIRO RODRIGUEZ, propietario de la carpintería ubicada en la carrera 102 Bis No. 139 – 52, para que “(...) en un término de quince (15) días, contados a partir del recibo del presente requerimiento, adecue (sic) una zona de pintura con su respectiva cabina de extracción y ducto de desfogue a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 948 de 1995. Igualmente, se le da un término de ocho (8) días para que registre el libro de operaciones de su actividad comercial ante el Sector Industrial Forestal del DAMA.”

El día **07 de Julio de 2005**, profesionales de la Subdirección Ambiental Sectorial, adelantaron visita técnica al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 de la

ciudad de Bogotá, D.C, de lo cual se dejó constancia en el Acta que obra a folio 11., se emitió el **Concepto Técnico No. 5656 del 15 de Julio de 2005**, en el cual se concluyó que:

*“Se requiere que al propietario y/o representante legal de la CARPINTERÍA, señor Jorge Suárez, o quien haga sus veces, que realice las acciones tendientes a:*

- *Optimizar el sistema de control de emisiones del área de pintura de tal manera que se de (sic) buen uso al extractor y ducto de salida y a que el área este totalmente cerrada y que no ocurran escapes de emisiones fugitivas al medio exterior dando cumplimiento con el Artículo 20 y 23 del Decreto 948 del 5 de Junio de 1995. Para tal propósito se concede un plazo de treinta (30) días calendario.*
- *Implementar un sistema de control de emisiones producidas tanto en el área de lijado (2° piso) como en el área de corte (1er piso) de tal manera que se de cumplimiento al Artículo 23 del Decreto 948 del 5 de Junio de 1995. Para tal propósito se concede un plazo de treinta (30) días calendario.*
- *Registrar el libro de operaciones de su actividad comercial en un término de quince (15) ante el sector de Industrias Forestales del DAMA.”*

Que mediante Radicado No. 2007EE5336 del 27 de febrero de 2007, la Subsecretaría General requirió al señor JAIRO RODRIGUEZ, propietario de la carpintería ubicada en la carrera 102 Bis No. 139 – 52, para que:

- *Optimizara el sistema de control de emisiones del área de pintura de tal manera que se de buen uso al extractor y ducto de salida y a que el área es totalmente cerrada y que no ocurran escapes de emisiones fugitivas al medio exterior dando cumplimiento al Artículo 20 y 23 del ecreto 948 de 1995. para (sic) esté propósito se concede un plazo de treinta (30) días calendario.*
- *Implementar un sistema de control de emisiones producidas tanto en el área de lijado (2° piso) como en el área de corte (1er piso) de tal manera que se de (sic) cumplimiento al artículo 23 del 948 de 1995. para (sic) esté propósito se concede un plazo de treinta (30) días calendario.*
- *Registrar el libro de operaciones de su actividad comercial en un termino (sic) de quince (15) días ante el Sector de Industrias Forestales del DAMA hoy Secretaría Distrital de Ambiente.”*

El día 18 de febrero de 2010, profesionales de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, adelantaron visita técnica al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52, de propiedad del señor JORGE SUAREZ, lo cual se dejó constancia en el Acta 201, se emitió el **Concepto Técnico No. 04541 del 15 de marzo de 2010**, en el cual se concluyó que:

- *Dio cumplimiento al requerimiento No. EE 5336 del 27 de Febrero de 2007 en el aparte: “Optimizar el sistema de control de emisiones de control de emisiones del área de tal manera que se dé buen uso al extractor y ducto de salida y a que el área es totalmente cerrada y que no ocurran escapes de emisiones fugitivas al medio exterior dando cumplimiento con el Artículo 20 y 23 del Decreto 948 de 1995.*
- *Dio cumplimiento al requerimiento No. EE 5336 del 27 de Febrero de 2007 en el aparte: “Implementar un sistema de control de emisiones producidas tanto en el área de lijado (segundo piso) como en el área de corte (primer piso) de tal manera que se dé cumplimiento al Artículo 23 del Decreto 948 de 1995.*

*- No dio cumplimiento al requerimiento No. EE 5336 del 27 de febrero de 2007 en el aparte: “registrar el libro de operaciones de su actividad comercial ante el Sector de Industrias forestales del DAMA hoy Secretaría distrital de Ambiente.”*

Que mediante **Auto No. 1674 del 01 de abril de 2011**, se ordenó el inicio de un proceso sancionatorio ambiental y se adoptaron otras determinaciones, en contra del señor **JORGE SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.472.210, como propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 de la ciudad de Bogotá, D.C, con el fin de verificar los hechos u omisiones constituidas de infracción a las normas ambientales.

El anterior auto fue notificado mediante edicto fijado el día 03 de junio de 2011 y desfijado el día 17 de junio de 2011, debidamente publicado en el Boletín Legal de esta Secretaría el día 20 de septiembre de 2011, y comunicado al Procurador encargado para asuntos ambientales y agrarios a través del memorando 005 de 2013.

Que mediante **Auto No. 4915 del 30 de septiembre de 2011**, se formuló pliego de cargos al señor **JORGE SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.472.210, como propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 de la ciudad de Bogotá, D.C, por:

*“**CARGO ÚNICO:** Por no haber tramitado ante la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, el registro del libro de operaciones, transgrediendo presuntamente con esta conducta el artículo 65 del Decreto N° 1791 de 1996.”*

El mencionado Acto Administrativo fue notificado mediante edicto fijado el día 19 de junio de 2012 y desfijado el día 23 de junio de 2012.

Una vez consultadas las bases de datos a disposición de la Entidad, se logró determinar que el nombre completo del presunto infractor es **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210. De acuerdo con lo expuesto, si bien hay un error de tipo formal en el Auto que ordenó el inicio del proceso sancionatorio y en el Auto de Formulación de cargos, toda vez que no se indicó el nombre completo del presunto infractor, esto no es determinante para establecer su plena identidad. Este error no tuvo consecuencias sustanciales, ya que del error no se puede inferir una indebida individualización, por lo tanto, no se vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa del investigado, lo cual no genera nulidad alguna.

Lo anterior, de acuerdo con lo expuesto por el consejo de Estado mediante sentencia con radicación número: 11001-03-25-000-2011-00115-00 (0390-2011), del once (11) de julio de dos mil trece (2013) “La Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. En aplicación de esta pauta, el Consejo de Estado ha establecido en una línea jurisprudencial pacífica que, en el contencioso de anulación de los actos administrativos disciplinarios, no cualquier irregularidad que se presente tiene por efecto generar una nulidad de las actuaciones sujetas a revisión – únicamente aquellas que, por su entidad, afectan los derechos sustantivos de defensa y contradicción del investigado. Así lo ha expresado

*inequívocamente esta Corporación, al afirmar que “no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario, genera de por sí la nulidad de los actos a través de los cuales se aplica a un funcionario una sanción disciplinaria, pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal entidad que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso”*

Una vez consultado el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara y Comercio de Bogotá, se concluyó que el señor **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210, cuenta con registro mercantil activo.

Es necesario precisar que dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210, no presentó descargos por escrito ni aportó o solicitó la práctica de pruebas que estimará pertinentes y conducentes.

Que a través del **Auto 00510 del 16 de marzo de 2015**, por el cual se decretan la práctica de pruebas en contra del señor **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210, propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52, de la ciudad de Bogotá, D.C.

Que el anterior acto administrativo fue notificado por edicto del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2015, con constancia de ejecutoria de 14 de septiembre de 2015.

Que una vez revisado el expediente **SDA-08-2010-947**, se encontró que no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación a proceder.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por esta entidad mediante visita técnica realizada el día **10 de enero de 2003**, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 01 de 1984, la Ley 99 de 1993, y el Decreto 1608 de 1978.

Consecuentemente, se advierte que los hechos materia de investigación son de naturaleza y de ejecución instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento, claramente determinado en el tiempo, el cual marca el punto de referencia y de partida para el computo del término de caducidad.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes

de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

**“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS.** *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el sub júdice es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

***Sin embargo,** los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, **los términos que hubieren comenzado a correr,** los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, **se regirán por las leyes vigentes cuando** se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, **empezaron a correr los términos,** se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones". (...)* (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el **10 de enero de 2003**, fecha para la cual no se encontraba vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad

comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *"nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente"*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Que, frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se*

*procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...).”*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que esta Secretaría, disponía de un término de **tres (3) años**, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es, desde el **10 de enero de 2003**, fecha de la verificación de los hechos, que dieron lugar a la presente actuación, y que se relacionan con la contaminación ambiental en el establecimiento de comercio, ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 de la Localidad de Suba de esta Ciudad., por tanto, esta Secretaría disponía hasta el día **10 de enero del 2006** para la expedición del Acto Administrativo que resolvería de fondo la Actuación Administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió; por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Por lo tanto, esta Resolución procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria y en consecuencia ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2010-947**.

### III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que en relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que en virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

De conformidad con lo contemplado en el Numeral 6º del Artículo Segundo de la Resolución 1865 del 6 de julio de 2021, de la Secretaría Distrital de Ambiente, “Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones” corresponde a la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaria “6. Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios”.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar La Caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso adelantado por la Secretaría Distrital de Ambiente, en contra del señor **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210, propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto y que constan en las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2010-947**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar la presente providencia al contra del señor **JORGE ELIECER SUAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.472.210, propietario del

establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 102 Bis No. 139 – 52 en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO:** Enviar copia de la presente Resolución a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, al correo electrónico [procesosjudiciales@procuraduria.gov.co](mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co).

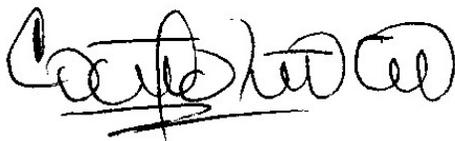
**ARTÍCULO QUINTO:** Publicar la presente providencia en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SEXTO:** Cumplido lo anterior archivar definitivamente las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2010-947**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el cual deberá interponer ante el Despacho de esta Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

*Expediente SDA-08-2010-947*

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**  
fecha



**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

AURA CONSTANZA GALVIS RINCON

CPS:

CONTRATO SDA-CPS-  
20220480 DE 2022

FECHA EJECUCION:

01/04/2022

**Revisó:**

DIANA PAOLA FLOREZ MORALES

CPS:

CONTRATO SDA-CPS-  
20220458 DE 2022

FECHA EJECUCION:

01/04/2022

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

02/04/2022